

El nacionalismo indígena en el poder

Pablo Stefanoni*

* *Periodista,
economista
y ex becario
de CLACSO
(Concurso
para investigadores
jóvenes, 2002).
Es coautor del libro
La revolución
de Evo Morales.
De la coca al Palacio 2006
(Buenos Aires:
Capital Intelectual).*

El triunfo electoral de Evo Morales Ayma el 18 de diciembre de 2005 dio inicio a una profunda reconfiguración del bloque sociopolítico gobernante. Mediante la combinación de formas de lucha institucionales y extra-institucionales, el movimiento indígena-popular logró, a través de su instrumento político, desplazar a las élites neoliberales que monopolizaron el poder y la palabra en las últimas dos décadas, e inaugurar una nueva hegemonía indígena-popular. Para ello contó con una legitimidad político-electoral sin precedentes: la mayoría absoluta de los votos (53,7%). Desde la restauración de la democracia en 1982, ningún partido llegó al gobierno por la sola fuerza del voto popular sin acudir a poco transparentes pactos políticos en el Parlamento para habilitar mayorías que la ciudadanía no había convalidado en las urnas¹.

La tesis central de este artículo es que Bolivia se encuentra inmersa en un nuevo ciclo nacionalista, en un entronque histórico con el nacionalismo militar de las décadas del

treinta y cuarenta, con la Revolución Nacional de 1952 y con el breve ciclo de nacionalismo obrero-militar de la década del setenta, una de cuyas expresiones fue la Asamblea Popular durante el corto gobierno del general Juan José Torres (1970-1971). Sin embargo, a diferencia de las experiencias anteriores, este nuevo nacionalismo plebeyo no es articulado por las Fuerzas Armadas ni por las clases medias urbanas, sino por las masas indígena-mestizas que han recuperado parcialmente los clivajes propios del viejo nacionalismo boliviano (lucha entre la nación y la anti-nación, anti-imperialismo y demanda de nacionalización de la economía y del Estado), pero incorporando un novedoso componente étnico-cultural y de auto-representación social en la construcción de una identidad colectiva popular atravesada por múltiples identificaciones sindical-corporativas.

¿Un gobierno de los movimientos sociales?

La experiencia político-estatal del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) plantea nuevos desafíos analíticos acerca de sus posibilidades democratizadoras y su capacidad para potenciar procesos de empoderamiento social y construcción de poder “desde abajo”. A la luz de los primeros pasos del gobierno del MAS, ¿puede hablarse de un gobierno de los movimientos sociales? Los primeros meses de gestión parecen avalar una respuesta en parte positiva y en parte negativa.

Por un lado, la fragmentación actual de los movimientos sociales y los conflictos internos al interior del MAS-IPSP han potenciado un modelo ultra-centralizado de toma de decisiones corporizado en Evo Morales. Por el otro, las determinaciones gubernamentales son consultadas con las direcciones de los principales movimientos sociales del país. La dificultad reside, en todo caso, en que los movimientos sociales están lejos de la imagen idealizada que ha construido una frontera ilusoria entre lo político y lo social, y muchas de las organizaciones “realmente existentes” conciben a la política más como “clientelismo popular” –es decir, como acceso prebendal a las estructuras estatales– que en su dimensión emancipatoria.

En un contexto en el que la identidad de los actores políticos y sociales tiene un fuerte componente corporativo, el momento de la universalidad –la visión de conjunto– recae en Evo Morales, quien intenta consolidar al pueblo como sujeto político por encima de la multiplicidad visualizada por los teóricos de la multitud, en una operación similar a la descrita por Ernesto Laclau en sus análisis de las formas articuladoras populistas, basadas en la equivalencia contingente de un conjunto de demandas populares (Laclau, 2005). El formato del liderazgo de Evo Morales toma mucho de la figura del líder carismático (muchos hablan ya del evismo³), y no resulta claro hasta el momento cómo garantizar



© Jose Luis Quintana

un mayor debate público y la participación social en un proceso de democratización desde abajo que desde el gobierno se percibe y promueve como una “revolución democrática y cultural”. Ello puede visualizarse en la apatía social que acompaña a la convocatoria a la Asamblea Constituyente que será elegida el 2 de julio de 2006, principal consigna de los movimientos sociales en los últimos años, concebida como espacio para debatir y concretar la refundación de Bolivia dejando atrás el colonialismo interno y nacionalizando efectivamente al Estado boliviano. Hay hoy una clara delegación del poder en el Ejecutivo: “si ya somos gobierno para qué queremos la Asamblea Constituyente”, dice una frase escuchada en estos días entre los movimientos sociales. Desde el propio gobierno no se percibe a la Constituyente como “poder constituyente de la multitud”, con independencia del Estado, sino como una instancia de “constitucionalización” de los cambios en marcha, como la recuperación de los recursos naturales. En este sentido, está presente la experiencia venezolana: transformar la actual iniciativa política de la izquierda nacionalista en una hegemonía de largo aliento.

Pese a estas observaciones, no se debe perder de vista que, a diferencia del populismo clásico, en el que la relación entre el líder y las masas es directa (o al menos se presenta como tal), el liderazgo de Morales está mediado por una multiplicidad de organizaciones corporativas y movimientos sociales ante los cuales debe rendir cuentas, en una versión boliviana del “mandar obedeciendo” de los zapatistas mexicanos.

Tampoco resulta un dato menor que Morales haya decidido aceptar su reelección como presidente de las seis federaciones cocaleras del Chapare “para no quebrar los lazos con los movimientos sociales que parieron al instrumento político”. En momentos considerados importantes, Evo Morales baja a las bases para retomar la relación *cara a cara* que define y revalida su liderazgo, en un contexto de modernización incompleta, vinculada al desarrollo trunco del proceso de industrialización operado en Bolivia; los viajes diarios de Evo Morales a congresos sindicales o reuniones campesinas e indígenas tienen la función de renovar y fortalecer este vínculo carismático. En este ámbito, Morales cuenta con un alto grado de autoridad, pero no con un cheque en blanco que le permita autonomizarse de los movimientos sindicales que dieron origen al “instrumento político”, y eso puede verse en cada ampliado del MAS en el que el presidente boliviano sigue con atención las propuestas de sus bases.

Un dato a tener en cuenta es que las líneas ideológicas en este partido de sindicatos no se expresan como corrientes internas sino como posiciones “personales” de sus dirigentes, y es sintomático que en los congresos masistas cada delegado exponga su posición sin polemizar con las otras y no se desarrolle un verdadero debate político-ideológico.

Este tipo de articulación política no está exento de tensiones: ¿qué pasa cuando un movimiento social decide medidas de fuerza contra el “gobierno de los movimien-

“El liderazgo de Morales está mediado por una multiplicidad de organizaciones corporativas y movimientos sociales ante los cuales debe rendir cuentas, en una versión boliviana del ‘mandar obedeciendo’ de los zapatistas mexicanos”

tos sociales"? Hasta ahora el gobierno se mostró firme tanto frente a los reclamos sindicales como ante conflictos de carácter empresarial, y ha manifestado la necesidad de defender los intereses del Estado frente a los variados intereses sectoriales expresados en los múltiples particularismos, vinculados en gran medida a la captación de una parte de la renta proveniente de los recursos naturales. Por ello, algunos análisis liberales hablan de una mentalidad rentista que atraviesa la historia de Bolivia, y que hoy se reactualizaría en las expectativas de despegue nacional que genera la nacionalización de los hidrocarburos (Molina, 2006).

El corporativismo —y, siguiendo a Antonio Gramsci, las tendencias conservadoras del campo popular— es una de las dificultades presentes en la consolidación del actual proceso de cambio como proceso contrahegemónico. Estas se presentan también en la difícil articulación, sinuosa y no exenta de tensiones, entre el movimiento social emergente y los intelectuales. En ausencia de estructuras institucionales que permitan articular a los técnicos con las organizaciones sociales, esta tarea recae en el liderazgo del propio Evo Morales, quien corrientemente considera a sus intuiciones como tanto o más válidas que los sofisticados análisis intelectualizados. Y en gran medida la historia reciente parece darle la razón: la estrategia que lo llevó al Palacio Quemado no fue una elaboración teórica, sino una sucesión de decisiones guiadas por la razón práctica adquirida en las trincheras del sindicalismo campesino.

El desafío del gobierno de la izquierda indígena es convertir estas intuiciones en una eficaz gestión con la capacidad para reconstruir el Estado y transformar las condiciones materiales de vida de los bolivianos, principal demanda de la sociedad.

La nacionalización de los hidrocarburos

El 1º de mayo de 2006, a dos días de cumplir los 100 días de gobierno, el presidente boliviano tomó la medida más esperada por los movimientos sociales que conforman la base del Movimiento del MAS-IPSP: la nacionalización de los hidrocarburos. Lejos de la nacionalización "light" pronosticada por sus críticos de izquierda³, el mandatario boliviano optó por un decreto duro, militarizó los campos petroleros y proclamó el control estatal del negocio hidrocarburífero en el país. El decreto 28.701, denominado "Héroes del Chaco" en referencia a la cruenta guerra contra Paraguay (1932-1935), restituye al Estado la propiedad, la posesión y el control total y absoluto del gas y el petróleo. A partir de la fecha de la firma del decreto las petroleras están obligadas a entregar al Estado toda su producción, que será comercializada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal. Esta determinará las condiciones de venta (precios y volúmenes) tanto en el mercado interno como externo. Además, las empresas deberán firmar, en un lapso



© Surai Azcárate

de 180 días, nuevos contratos acordes con el nuevo armazón legal nacionalizador. En caso de resistencia, YPFB tomará a su cargo la operación de sus campos.

El Estado retomó también la mayoría de las acciones en las empresas capitalizadas (privatizadas) en la década del noventa mediante la recuperación de las acciones de los ciudadanos en manos de las administradoras de fondos de pensión (AFPs)⁴ y, según el decreto, se nacionalizarán las acciones necesarias para garantizar el control estatal de por lo menos el 50% + 1 de las acciones de refinerías, ductos y centros de almacenaje.

Asimismo, hubo fuertes cambios impositivos: los campos que produjeron en promedio más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas en 2005, Sábalo y San Alberto, pagarán una combinación de impuestos, regalías y participaciones de 82%, que deberá incorporarse a los nuevos contratos⁵.

En los últimos años, dos gobiernos fueron expulsados del poder por la demanda de nacionalización del gas y el petróleo. Gonzalo Sánchez de Lozada intentó exportar el compuesto energético por puertos de Chile –país que durante la guerra del Pacífico, entre 1879 y 1886, se apropió del litoral marítimo boliviano– y provocó una asonada popular con un saldo de más de 60 muertos y 400 heridos. Su sucesor, Carlos Mesa, intentó un fatal equilibrio entre las petroleras y los movimientos sociales, con una actitud dubitativa que favoreció la radicalización social y su propia caída.

Hoy, los sectores populares se entusiasman con la posibilidad de un despegue económico de este país históricamente postergado, cuyos recursos naturales terminaron siempre en manos de pequeñas elites aliadas al capital extranjero. Los riesgos políticos y económicos no son pocos. Uno de los ejes de conflicto es con Brasil, ya que Petrobras, que controla el 46% de las reservas probadas y probables de gas de Bolivia y el 39,5% de sus reservas de petróleo, es la principal empresa petrolera afincada en Bolivia. El gobierno de Lula –quien se enteró por la prensa de la nacionalización, a diferencia de Hugo Chávez y Fidel Castro, que lo habrían sabido dos días antes– combinó gestos de distensión con anuncios de independencia energética de Brasil para dejar de depender del gas boliviano. Según versiones de la prensa, en la cancillería brasileña existe preocupación ante el incremento de la influencia venezolana en este país andino-amazónico. Los recientes acuerdos en torno a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) están conformando un bloque entre Bolivia, Cuba y Venezuela que está reconfigurando el mapa sociopolítico de la región, a lo que se suma la crisis de los dos bloques más importantes de Sudamérica: la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

La escenificación de la nacionalización mediante la ocupación militar de los pozos petroleros ha puesto de relieve los vínculos del nuevo nacionalismo indígena con el viejo nacionalismo boliviano. Evo Morales se propone un renovado pacto militar-campesino, esta vez no como un instrumento de las Fuerzas Armadas para cooptar al campesinado, como lo fue el impulsado por el general René Barrientos después del golpe de 1964 (Soto, 1994), sino articulado desde un gobierno indígena-popular que incorpore a las FF.AA. al actual proceso nacionalista.

El devenir del proceso político boliviano desde la crisis de octubre de 2003 ha dejado en claro que las corrientes socialistas resultan minoritarias y marginales; que la mayoría de los movimientos sociales promueve una perspectiva de reformas en el marco del “capitalismo de Estado”⁶; y que luego de cada crisis se produce un repliegue defensivo hacia lo sindical-corporativo. En ese contexto, el actual gobierno está promoviendo un “reformismo con reformas” que contrasta con otras experiencias de izquierda o centroizquierda en la región, y ensayando los primeros pasos para poner en marcha un proyecto posneoliberal.

Bibliografía

- Laclau, Ernesto 2005 *La razón populista* (Buenos Aires: FCE).
- Molina, Fernando 2006 *Evo Morales y el retorno de la izquierda nacionalista* (La Paz: Eureka).
- Soto, César 1994 *Historia del Pacto Militar Campesino* (Cochabamba: Ediciones CERES)
<<http://www.clacso.edu.ar/~libros/bolivia/ceres/soto.rtf>>.

García Linera, Álvaro 2006a "El Evismo. Lo nacional y popular en acción" en *El Jugete Rabioso* (La Paz) Año 5, N° 150, abril.

García Linera, Álvaro 2006b "El capitalismo andino-amazónico" en *Le Monde diplomatique*, Edición Cono Sur, N° 79, enero.

Notas

1 En Bolivia, si ninguna fórmula obtiene más del 50% de los votos, el presidente es elegido entre los dos binomios más votados por el Congreso, reunido en Asamblea Legislativa.

2 Ver García Linera, 2006a (N. del D.: puede consultarse dicho artículo en el presente número del OSAL).

3 Una de las ideas predominantes era que la nacionalización iba a ser solamente "cosmética" y mediática.

4 Se trata de Chaco (Panamerican Energy, controlada por British Petroleum), Andina (Repsol-YPF) y Transredes (Shell). De las políticas de privatización aplicadas durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) surgieron diez empresas "capitalizadas". La operación entregó el 50% de las acciones de las empresas estatales a sus "socios" capitalizadores, mientras el resto del paquete accionario se dividía entre los trabajadores (2%) y "los ciudadanos bolivianos" (48%). Las AFPs eran las encargadas de administrar las acciones de ese conjunto difuso de propietarios a través del denominado Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) y de representar a los bolivianos en el directorio de las empresas. Con los dividendos del FCC se pagaba la pensión denominada Bonosol a los bolivianos mayores de 65 años, que ahora pagará YPFB.

5 Ver decreto de nacionalización en Agencia Abi, <www.comunica.gov.bo/index.php?i=decretos>

6 El vicepresidente Álvaro García Linera ha propuesto la fórmula de "capitalismo andino-amazónico" para diferenciar su proyecto del anterior nacionalismo revolucionario de los años cincuenta (García Linera, 2006b).